

¿Público o privado?



MIENTRAS QUE SE NACIONALIZAN ENTIDADES FINANCIERAS Y SE ULTIMA UN POSIBLE RESCATE A LAS AUTOPISTAS, LAS ADMINISTRACIONES SE LANZAN A UNA FRENÉTICA CARRERA POR PRIVATIZAR SERVICIOS ESENCIALES O VENDER ACTIVOS. UNA PARADOJA QUE SE ACENTÚA POR LA CRISIS.

POR AMAIA ARTETA Y VALENTÍN BUSTOS

Su misión no era nada sencilla: recomponer la maltrecha economía española después de tres años de Guerra Civil. Bajo esta premisa, y en los años cuarenta del pasado siglo, nació el Instituto Nacional de Industria (INI). Y lo hacía con una dotación de cincuenta millones de pesetas procedentes del Estado con los que afrontar el necesario volumen de inversiones que la iniciativa privada no podía acometer. Con el paso del tiempo, se creó todo un *holding* empresarial que abarcó campos tan variados como el aluminio, la energía, los sectores naval y armamentístico, la minería, el transporte aéreo, la industria del papel y la promoción del turismo. Sin embargo, con el estallido de la crisis del petróleo en la década de los setenta, su papel dio un giro radical, de 180 grados: auxiliar a las empresas privadas en crisis. Entonces, este organismo se erigió como un “auténtico hospital de empresas privadas”, lo que llevó a una situación de excesiva capacidad y pérdidas crecientes. Todo por garantizar la paz social en plena transición democrática. El caso más emblemático fue el rescate de las sociedades de la cuenca minera asturiana, que pasaron a ser públicas bajo el nombre de Hunosa. Fue a partir de 1982, con la llegada al Gobierno del PSOE, cuando se dio otro cambio de rumbo a la empresa pública, siguiendo las exigencias de desregulación, desmonopolización y defensa de la com-

632.219

millones de euros hasta 2012. Es la cantidad que han recibido las entidades financieras españolas (incluyendo capital, esquemas de protección de activos, préstamos del BCE, líneas de liquidez, avales del Estado...).

92.500

millones en 2010. Las ayudas concedidas por el Gobierno español se han multiplicado por veinte desde 2005 por el efecto de la crisis.

5

billones de euros de ayudas al sector financiero han sido aprobadas en la UE desde 2008. Equivalen al 40,3% de su PIB.

En 2011, el **0,5%** del PIB de la UE se destinó a ayudas estatales no relacionadas con la crisis. En los años ochenta, éstas llegaban al 2%.

petencia dictadas desde Bruselas. Hoy, el Estado se ha visto obligado, otra vez, a salir al rescate de la iniciativa privada, especialmente de un sector financiero colapsado por una crisis sin precedentes desde la II Guerra Mundial que dura ya cinco largos años. "El INI no va a volver, pero la participación del Gobierno es una situación atípica. No solo aquí, hay que ver lo que está pasando en el Reino Unido", señala Mauro Guillén, director del Joseph



PRIVADO

33.949

millones de euros son los ingresos generados por el Estado entre 1996 y 2011 gracias a la venta de su participación, de forma total o parcial, en el capital de 62 empresas.

2.677

es el número de empresas que conforman el sector público en España.

913.602

millones de euros es la deuda bruta de las Administraciones Públicas en febrero de 2013.

15.500

millones de euros es la deuda de las empresas públicas de las Comunidades Autónomas.

1.200

millones de euros anuales es lo que le cuesta al contribuyente británico la privatización de sus ferrocarriles.

H. Lauder Institute de la Universidad de Pensilvania. La intervención pública como mal menor ha sido la tónica imperante para subsanar los fallos del mercado. "Lo malo es que no suelen aprovecharse los momentos de bonanza para reducir el tamaño elefantiásico del Estado", se lamenta Ignacio Ruiz-Jarabo, ex presidente de la SEPI. Una opinión generalizada, aunque con matices. Porque como dice Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI), "es un prejuicio pensar que lo público funciona peor. En Estados Unidos nadie se plantea privatizar la Universidad de Berkeley". Lo cierto es que el paso de lo público a lo privado no es una tarea sencilla. "A veces se hace bien y otras, no. Los detalles son muy importantes, porque no son una solución mágica", apunta Guillén.

La compleja convivencia público-privada se presenta, además, en múltiples envoltorios, desde las concesiones administrativas hasta la lluvia de subvenciones a las que muchos apelan para sobrevivir. Y no es raro encontrarse con situaciones en las que a la Administración se le va la mano. Es el caso del complejo audiovisual alicantino de la Ciudad de la Luz. Un proyecto financiado por el Consell valenciano que Bruselas ha tumbado al considerar competencia desleal los 265 millones de euros de subvenciones. La Comisión Europea sostiene que los fondos de la Generalitat alteraron de forma artificial el funcionamiento del mercado cinematográfico interno de la UE, al ejecutar una inversión multimillonaria que nunca habría podido ser afrontada por un inversor privado en condiciones similares. También denuncia que la empresa pública rebajó los precios de contratación de forma anormal y dio incentivos para atraer producciones extranjeras. Ahora, el remedio que la Administración valenciana propone es... venderla al mejor postor. ¿Dónde están los límites? "Tiene que haber un equilibrio. Lo que sería agobiante es que la propiedad pública llegara a sectores donde no tendría que estar", recalca Ontiveros. ■